

El rumbo de la Economía en la Argentina

Por: Julio C. Gambina*

El carácter del gobierno

El primer problema que se presenta es cuando a un argentino lo consultan sobre el gobierno de Néstor Kirchner. Para algunos sectores del poder económico mundial es el “señor anti mercado”¹. Así lo calificó la prensa estadounidense en la reciente visita a New York, para participar de la Asamblea anual de la ONU, ocasión que sirvió para realizar variadas entrevistas con inversores, actuales y potenciales. Es un calificativo a pesar de las declaraciones del imputado, que a minutos de iniciar la rueda de negociaciones en Wall Street, con el simbólico campanazo, manifestó agradecer el “gesto del mercado” por la invitación y destacando que la “Argentina está volviendo al lugar del que nunca debió haber salido”². Es una aseveración concordante con lo manifestado en su intervención original para “reconstruir el capitalismo nacional”³. Más directa fue la Senadora Cristina Fernández de Kirchner al señalar que “La lógica del gobierno es volver viable a la Argentina dentro de la lógica del capitalismo”.⁴

Sin embargo, en buena parte de la “opinión progresista (incluso de izquierda) mundial”, categoría difusa por cierto, pero existente entre intelectuales, dirigentes políticos y sociales, aunque también entre sectores menos informados de la población mundial, lo que aparece son las opiniones del Presidente de la Argentina sobre los Organismos Financieros Internacionales⁵ e incluso confrontaciones con algunos de los empresarios más poderosos que actúan en la Argentina⁶. Recientemente y ante la Asamblea de la ONU dijo que “Existe suficiente constatación empírica en cuanto a que los aportes de los organismos financieros internacionales a la promoción del desarrollo de los países menos adelantados, no ha tenido éxito y, en muchos casos, en función de sus condicionalidades, han actuado en sentido contrario obstaculizando el desarrollo.” Son críticas sostenidas al mismo tiempo que un cumplimiento estricto de los pagos por vencimiento de deuda pública, que con el FMI llegaron al pago anticipado de casi 9.500 millones de dólares⁷ en enero del 2006.

El gobierno argentino se jacta de cierta heterodoxia, que incluye una fuerte crítica a la corriente de pensamiento que fuera hegemónica en los 90' y que estuviera inspirada en el Consenso de Washington. A pesar de ello, ninguna de las reformas estructurales generadas en ese tiempo han sido revertidas en los tres años de gobierno (2003/2006) y que el proyecto de Presupuesto para el 2007 presentado el 26/9/06 ante el Parlamento no ofrece ninguna señal de modificaciones en ese sentido. No aparecen propuestas que indiquen señales en la distribución progresiva del ingreso y mucho menos de la riqueza, mediante reformas tributarias progresivas o propuestas radicales que sugieran una reforma agraria, financiera o productiva sustentada en un bloque social de las clases subalternas. La tónica apunta a la continuidad esencial de la gestión desplegada en este turno presidencial (2003/2007).

* Profesor de Economía Política en Universidades Públicas de Argentina. Integrante del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (Diciembre 2006/Noviembre 2009).

¹ Los diarios argentinos del 27/09/06 (La Nación o Clarín) recogían las críticas al Presidente argentino del Editorial del periódico estadounidense The Wall Street Journal, quién denominó a Kirchner como el “señor antimercado”.

² Diario La Nación del 20/9/06

³ Página de la presidencia de la Nación Argentina, sección discursos. Intervención del 25/5/03. www.presidencia.gov.ar

⁴ Diario La Nación del 19/9/06

⁵ Ver el Discurso pronunciado el 20/8/06 ante la Asamblea de la ONU. Sitio de la Presidencia en Internet.

⁶ En marzo de 2005 llegó a plantear un boicot a la petrolera Shell por aumentar el precio de los combustibles, logrando el éxito, con el acuerdo mediante para no incrementar los precios con otras petroleras de mayor peso en la Argentina, caso de Repsol y Petrobras, con la ventaja de ser éstas refinadoras.

⁷ Más de diez veces el costo del principal programa de asistencia social y que involucra a un millón setecientas mil personas en el “Plan de Jefes y Jefas de Hogar desempleados”, quienes reciben todos los meses una asignación de 150 pesos, equivalentes a poco menos de 50 dólares.

Es común que se escuche la calificación de “progresistas” a varios de los nuevos gobiernos surgidos en la región latinoamericana y caribeña, e incluso se habla de “giro a la izquierda”⁸. Son denominaciones no aceptadas por el oficialismo argentino y que prefieren remitir al “peronismo”, fenómeno político y social complejo a la hora de definir bajo los clásicos parámetros de “izquierda” o “derecha”, incluso de “centro”. No es el objeto de estas notas, pero el peronismo lleva más de 60 años en la vida política de la Argentina, concentrando en su seno el abanico posible de izquierda a derecha. Un interrogante recurrente para los estudiosos de la sociedad y la política en la Argentina es la posibilidad de la emergencia de una nueva representación política de las clases subalternas, algo de lo cual podía vislumbrarse en la crisis del 2001 y que sin embargo no pudo materializarse y continúa siendo una asignatura pendiente.

De hecho, por el propio accionar del gobierno, o por la inercia subsistente de la dinámica popular del ciclo de protestas sociales con epicentro en 2001 y 2002, la dinámica de la evolución de la Argentina se asocia a las expectativas generadas por los cambios de gobierno en la región, especialmente en Venezuela, Brasil, Uruguay y recientemente Bolivia. Argentina era una incógnita, ya que su gobierno es producto de la crisis, pero no es una construcción derivada del movimiento de protesta. Es una diferencia con el resto de los países mencionados. En todos los otros casos, se accede al gobierno tras un periodo de movilización y construcción de referencia, liderazgo e instrumento político para un gobierno con pretensión transformadora. Nadie podía imaginar el accionar en la Administración Nacional de Néstor Kirchner, asumido en las elecciones presidenciales del 2003 (27/04/03) donde obtuvo el segundo lugar con el 22% de los votos, aunque las encuestas lo daban por seguro ganador en la segunda vuelta⁹. El retiro de la segunda vuelta de quién había obtenido el primer lugar, con el 24% de los votos¹⁰, permitió que asumiera un gobierno considerado débil por el escaso apoyo obtenido. La imagen del nuevo Presidente era sospechada de ser “dependiente” de Eduardo Duhalde¹¹, presidente de la transición entre enero del 2002 y mayo del 2003, a la sazón, el elector del candidato oficial del Partido Justicialista (PJ), el partido del gobierno. La primera tarea del nuevo gobernante fue la de construir “poder propio”, y puede afirmarse que habiendo ya transitado tres años de gobierno, esa meta ha sido lograda. Es más, en los análisis políticos de la coyuntura argentina se sostiene la ausencia de una oposición con posibilidades de disputar el gobierno en la próxima renovación presidencial de octubre de 2007. Existe la opinión generalizada de que buena parte del consenso político deviene de la bonanza económica expresada en tasas de crecimiento del PBI del 9% promedio entre el 2003 y el proyectado para 2006, tal como se muestra en el Cuadro I.

Cuadro I
Evolución del PBI

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
3,9%	-3,4%	-0,8%	-4,4%	- 10,9%	8,7%	9%	9,2%	8,5%

Fuente: Indec, 1998-2005; 2006 estimación propia.

⁸ Expresión que con variantes usan la prensa especializada, tal como The Economist, The Wall Street Journal, e incluso comentaristas mediáticos de amplia difusión en la prensa de la región, como Andrés Oppenheimer o Mario Vargas Llosa.

⁹ El régimen electoral de la Argentina establece que “Resultará electa la fórmula que obtenga más del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos; o en su defecto aquella fórmula que hubiese obtenido el CUARENTA POR CIENTO (40%) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiese una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos. Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias, se realizará una segunda vuelta dentro de los TREINTA (30) días, participando solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, y resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos.” (Código Electoral Nacional)

¹⁰ Carlos Menem podría haber sido nuevamente Presidente de no mediar el régimen electoral de “segunda vuelta”. Es un tema para adicionar complejidad al comentario anterior sobre el fenómeno del peronismo en la Argentina.

¹¹ Vicepresidente de Carlos Menem (1989-1991); Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1991-1999) y candidato a Presidente por el PJ en las elecciones de renovación presidencial de 1999 donde fue electo Fernando De la Rúa.

En la gestión de Néstor Kirchner, y desde el punto de vista de la política económica pueden señalarse dos etapas muy claras y vinculadas a los dos ministros que ocuparon la cartera de “economía”. Roberto Lavagna, que venía siendo el Ministro de Economía de Eduardo Duhalde desde abril del 2002, fecha de inicio de la recuperación de la economía Argentina, luego de una larga recesión entre 1998 y 2002, continuó en su función en la nueva gestión hasta diciembre del 2005. Fue reemplazado en su cargo por Felisa Miceli, entre cuyos antecedentes figuraba haber trabajado en la “consultora” particular de Lavagna y llevada por éste a las esferas de gobierno, primero como expresión del ministro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego al frente del Banco de la Nación Argentina (BNA).

La primera etapa se caracteriza por la recuperación de la economía y la negociación del endeudamiento público en default. La cesación de pagos fue transitada desde la última semana de diciembre del 2001 a mayo del 2005, momento en que se materializó el canje de deuda con una considerable quita a los acreedores de títulos elegibles con atraso. La segunda etapa se define por el mantenimiento de la recuperación y reactivación de la economía, con privilegio en el combate a la inflación, que había crecido considerablemente durante el año 2005 y se proyectaba en ascenso para el 2006. El futuro inmediato, ligado a la posible reelección presidencial se asocia a la continuidad del crecimiento con un tipo de cambio elevado, para asegurar la competitividad de la producción local, la fuerte recaudación tributaria y el superávit fiscal para el cumplimiento riguroso de los compromisos externos. En ese marco es que algunos especulan con el aliento a una nueva etapa que resuelva la demanda por la distribución del ingreso e incluso de la riqueza. Es un tema más de especulación política que de rumbo concreto que pueda derivarse de políticas concretas.

El objetivo del gobierno

En el discurso inaugural, Néstor Kirchner definió el objetivo de su gestión y las principales medidas de acción, más como un “rumbo” que como un plan concreto. En esa idea de rumbo u orientación del accionar gubernamental manifestó: “En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente.”¹² Es preciso recordar que el país venía transitando una prolongada recesión de cuatro años de duración (98/02), tal como se aprecia en el Cuadro I, y que había explotado haciendo evidente la crisis a fines del 2001 y culminando con la renuncia del gobierno constitucional de Fernando de la Rúa (1999-2001). En otro tramo de su discurso convocará a construir un “país normal”, aludiendo a la superación de la crónica crisis, que de la economía se había proyectado a la política y amenazaba la institucionalidad constitucional recuperada desde fines de 1983.¹³

En el mensaje mencionado se suscita que “es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso”. Para afirmar la institucionalidad se sostiene que “Vamos a apoyarnos en la Constitución para construir una nueva legitimidad de las leyes...”. En lo económico específicamente se plantea “El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años. El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años, y una distribución tal que asegure una mayor distribución del ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas.” Afirmando algunas máximas como el “equilibrio fiscal”, “más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto”, siendo el “equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, fundamental.” El propósito general era “dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y competitividad.” Respecto de la inserción global se planteaba que el

¹² Discurso del Presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa en el acto de asunción, del 25/05/03. Tomado de <http://www.presidencia.gov.ar>

¹³ El 10/12/83 asumía la Presidencia constitucional Raúl Alfonsín, luego de años de gobierno de una dictadura genocida entre 1976 y 1983, y parte de un proceso histórico que desde 1930, lo “normal” era la recurrencia de golpes militares.

“país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través del MERCOSUR, y de políticas cambiarias flexibles acordes a nuestras productividades relativas y a las circunstancias del contexto internacional”, para sustentar luego relaciones adecuadas con EEUU y la Unión Europea.

Un rumbo por el “capitalismo nacional”. Una opción por la “integración regional” en un marco de privilegio a la “movilidad social ascendente” basada en el equilibrio entre el “mercado interno” y la inserción internacional. Se sostenía “que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.” y que la pobreza se resolvía con política económica y no con política social. El acento se pondría en resolver las demandas sociales insatisfechas en materia de educación, salud, seguridad. Las líneas generales del accionar del nuevo gobierno estaban dadas a conocer. Se criticaba el modelo anterior, especialmente la década del 90, tanto por las políticas como por los liderazgos. Crítica al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) al señalar que la “medida del éxito de esa política, la daba las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo.” También criticaba al gobierno que le sucedió al decir que “algunas fuerzas políticas en 1999, se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses.”

En rigor, también se alejó de las transiciones luego de la crisis de fines del 2001, no avalando la fuerte devaluación del peso realizada a comienzos del 2002 y que representó una fortísima transferencia de recursos desde los sectores de menores a los de más ingresos, y tampoco sostuvo la cesación de pagos al señalar en su mensaje al Congreso en 2004 que “este no es el gobierno del default”¹⁴. Desde el primer discurso hasta la actualidad, los objetivos han sido formulados en contradicción con aquellos afines al modelo imperante en los 90’. Las declaraciones mencionadas al comienzo de estas notas pueden expresar un cambio discursivo más amigable a los oídos de los inversores internacionales, máxime cuando en América Latina está en discusión el rumbo económico, social y político y especialmente cuando los resultados en materia de beneficiarios y perjudicados por la política económica no implican una ruptura con los parámetros previos.

Sostiene Atilio A. Borón¹⁵ que “Cuando uno analiza los discursos del presidente Néstor Kirchner, tiene la sensación de que está en Venezuela. Si uno leyera los discursos sin saber de quiénes son, no sabría si quién habla es Hugo Chávez o el propio Kirchner. Hay en ellos una crítica muy fuerte al neoliberalismo, al imperialismo, al colonialismo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a los empresarios...” y se interroga “¿qué reflejo tiene esto en la gestión económica, en el día a día de la práctica concreta del Ministro de Economía, Roberto Lavagna? Y, lamentablemente, constatamos que hay un abismo que separa el discurso del presidente de la práctica concreta que lleva a acabo el Ministro de Economía, que sigue dentro de los carriles del Consenso de Washington”.

Hemos mencionado que existen dos momentos en la aplicación de la política económica. El primer momento remite a la gestión de Roberto Lavagna, quien ocupaba el cargo desde antes de la asunción del gobierno, pues había sido convocado a la función en abril del 2002, fecha coincidente con el cambio de la tendencia recesiva de la economía argentina. Fue uno de los ministros heredados y que daba la nota de continuidad con el turno anterior, aunque Lavagna se desmarcaba de la devaluación producida en enero de 2002. El éxito cosechado por Lavagna devenía de un cambio de los precios relativos que favoreció la producción local, fuertemente afectada por el régimen de convertibilidad que funcionó entre abril de 1991 y la devaluación (pesificación asimétrica). La modificación del tipo de cambio fijo por once años fue el mecanismo principal para iniciar la superación de la recesión y de la explicitada crisis del 2001. El trabajo

¹⁴ Mensaje inaugural de las sesiones del Parlamento del 1/5/2004. Ver en sitio en Internet de la Presidencia de la Nación Argentina.

¹⁵ Atilio Borón, en Los gobiernos progresistas en debate. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. Compilador Antonio Elías. Clacso e Instituto Cuesta Duarte/PIT CNT, Buenos Aires, 2006.

“sucio” ya había sido realizado y no era inocuo en términos de impacto social, puesto que se acrecentó en forma muy importante el nivel de la pobreza, el desempleo y la informalidad del mismo.

Ya en el gobierno de Néstor Kirchner se venía constatando trece meses de recuperación de la economía. Lavagna sentía eso como “atributo propio” y será tema de disputa entre él y el Presidente hasta el momento de su retiro como ministro. Es más, ya lanzado como posible candidato para la renovación presidencial, hace gala de “padre de la recuperación de la economía” y se permite la crítica a la gestión actual por el abandono de líneas establecidas en su gestión. El tema central de esta etapa será la “estabilización” de las cuentas macroeconómicas, junto al mantenimiento de un tipo de cambio alto con intervención estatal en el mercado de cambios; y la reinserción de la Argentina en el sistema mundial de crédito, para lo que había que abandonar la cesación de pagos. Ambos aspectos (estabilización con tipo de cambio alto y reinserción internacional) caracterizan la gestión Lavagna al frente del Ministerio de Economía. Objetivos que fueron logrados y demandaron según el discurso oficial una nueva etapa de renovación en el gobierno. Era una conclusión coincidente con la lectura oficial del resultado de las primeras elecciones de renovación legislativa durante la administración Kirchner, en octubre del 2005. El importante triunfo electoral de carácter nacional, según la interpretación oficial, daba por terminada la etapa de gobierno apadrinado por el Ex Presidente Duhalde. Kirchner aparecía con poder propio y lo ponía de manifiesto cambiando al ministro del “éxito económico” y demostrar en la práctica la paternidad de la recuperación, ya reactivación de la economía.

Si bien el nuevo cargo era cubierto por Felisa Miceli, una persona de confianza de Lavagna, la lectura de los analistas era que el nuevo ocupante del Palacio de Hacienda era el propio Presidente. Empezaba una nueva etapa y que se concentrará en mantener los logros en materia de estabilización e inserción internacional, y combatir la escalada de precios que crecía con el correr de los meses. Si para el 2003 el crecimiento de los precios minoristas había sido del 3%, al año siguiente alcanzaban un incremento de 6% y el 2005 cerró con 12,1% con proyecciones en esa fecha del 15 ó 16% para el 2006. Se abrió allí una discusión sobre la política antiinflacionaria, quedando Lavagna sosteniendo una propuesta considerada ortodoxa por el gobierno. Eran posiciones más cercanas a las demandadas por la ortodoxia económica que sustentaba restricciones a la política monetaria y a la demanda de mayores ingresos salariales.

La nueva “ministro” asumió la misión de la “etapa” ensayando una política de negociación de precios y salarios, que se constituirá en eje central para definir sectores sociales alineados con la perspectiva de alianza social para sustentar la gestión gubernamental. El año 2006 terminará con una proyección inflacionaria menor al 2005 y una tasa de crecimiento similar. Más allá de quién dirige la política económica, el recambio ministerial aparece exitoso en el control de la evolución de los precios, con iniciativas de concertación de precios que se proyectan para todo el 2007, principalmente en los productos que inciden en el consumo popular. Las distorsiones en el sistema de precios relativos es un fenómeno que se traslada para el futuro y que puede generar serios problemas en el corto plazo, con un gobierno que aspira a renovar el turno presidencial¹⁶ antes de que ello ocurra.

Dinámica de la normalización de las relaciones con el mercado mundial

En la primera etapa se destacan las relaciones con el FMI a los efectos de definir el marco de negociación con los acreedores externos en default. Será una relación de confrontación discursiva y de riguroso pago de los vencimientos con ese y otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el BID. Luego de la cesación de pagos (enero del 2002) se suscribirán acuerdos con el FMI previo a la administración Kirchner (enero 03) y ya con éste en el gobierno habrá un nuevo acuerdo en septiembre del 2003. La relación entre el gobierno y el FMI será una de las claves de la política económica del gobierno en la primera de las etapas que hemos indicado. Durante la gestión Lavagna se cancelarán deudas con los Organismos Financieros Internacionales por 15.000 millones de dólares. Inmediatamente después del cambio ministerial se anuncia la cancelación anticipada de la deuda con el FMI por casi 9.500 millones de dólares, operación concretada en la gestión Miceli en los primeros días del 2006. Fue una política saludada por el ex ministro.

¹⁶ Las elecciones se producirán en octubre de 2007 y por ahora se descuenta el triunfo del oficialismo.

No hay duda que el tema del endeudamiento público es uno de los grandes condicionantes de la economía argentina en los últimos treinta años y el volumen de la deuda en cesación de pagos, como la quita resultante hacia el canje de deuda en 2005 es demostrativo de la importancia que el tema tiene. Un dato relevante es que el FMI estaba fuertemente asociado a la estrategia global en curso en Argentina, validando el “modelo” en la Asamblea conjunta del FMI y el BM del 98 invitando al presidente del país para brindar el mensaje y asociar a la Argentina al “deber hacer” por el resto de la comunidad mundial. Argentina era el modelo a imitar. Ante las dificultades manifiestas del 2000, el FMI salió a sostener la política económica con el “blindaje financiero”, una política de crédito a disposición de las autoridades por 40.000 millones de dólares, que fue impulsada durante el 2001 con el desembolso de recursos por el FMI que postergaron el hecho “casi evidente” de la cesación de pagos por venir. Durante el 2001 se realizaron dos operaciones de canje¹⁷ de deuda para aliviar plazos de vencimiento de la misma con aval del FMI. Esa asociación del FMI llevó a que la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI estudiara críticamente esa relación y aún más allá de ello, la comunidad internacional dudó de la efectividad del papel del FMI ante la crisis Argentina y otras concomitantes en un ciclo de crisis entre 1994 (tequila), 1997 (Asia), 1998 (Rusia), 1999 (Brasil) y 2001 (Argentina). Esa crítica instalada globalmente es la base de justificación de las críticas emanadas de la administración Kirchner, quién tiene el mérito de denunciar la corresponsabilidad del organismo en la crisis argentina.

A tal punto se desarrolló la crítica que el FMI fue marginado del debate por el canje de la deuda en default. La política del gobierno significó “denunciar” los acuerdos establecidos con el FMI, cancelar en tiempo los vencimientos con éste y otros organismos internacionales y manejar la relación con los acreedores, tenedores de títulos en default por unos 100.000 millones de dólares, 20.000 de ellos por atrasos que finalmente no se reconocieron. El FMI, por primera no se involucraba en la negociación de la mayor cesación de pagos contemporánea en el mundo. De hecho se había transformado en acreedor privilegiado, pues cobraba rigurosamente, al mismo tiempo era dejado de lado al momento de las negociaciones, desoyéndose sus comentarios y consejos en materia de política económica.

En septiembre del 2003 se anuncia en Dubai las características del canje de una deuda elegible de 81.800 millones de dólares y se desconocían los intereses impagos. Se anunciaba una quita del 75% para la emisión de los nuevos títulos. En junio del 2004, ya en Buenos Aires se flexibilizará la propuesta mejorando las condiciones del canje ante la presión internacional. Entre enero y marzo del 2005 se materializará el canje con una elevada aceptación entre los acreedores, del 76,15% de los títulos elegibles. Se retiraron así 62.300 millones de dólares de viejos bonos por nuevos a un valor de 35.300 millones de dólares. Casi 20.000 millones de dólares quedaron sin canjearse y constituyen una asignatura pendiente que el gobierno por ahora desconoce, pero que en los tribunales estadounidenses ya existen sentencias que obligan a la cancelación al Estado argentino. Del 75% de quita se bajó al 43,39% (Cuadro II). Es una quita considerable y que fue soportada sin crisis por el sistema financiero mundial, con la aclaración necesaria de que la mitad de los acreedores en default eran inversores argentinos y que la mitad de ellos, un cuarto del total eran inversiones generadas por el sistema previsional de capitalización, afectando por cierto a los adherentes a ese sistema de pensiones y jubilaciones.

¹⁷ Por esta operación existe sentencia en primera instancia para 4 funcionarios públicos, entre ellos el ex Presidente De la Rúa y el ex Ministro Cavallo. El peritaje técnico estimó en más de 40.000 millones de dólares el mayor endeudamiento derivado de esa operación de canje, con un costo en comisiones a los bancos que la realizaron por 1.500.000 dólares; razón por la cual la Justicia también inició una causa judicial.

Cuadro II
Canje de Deuda Pública en default

Deuda elegible en default	81.800 millones de dólares
Títulos que continúan en default (1)	19.500 millones de dólares
Títulos en default presentados al canje	62.300 millones de dólares
Nuevos títulos entregados en canje	35.300 millones de dólares
Quita de la deuda	27.000 millones (43,39 %)

(1) El gobierno no los reconoce y existe una fuerte presión internacional para una nueva propuesta de reestructuración. Fuente: Ministerio de Economía. www.mecon.gov.ar

Un dato curioso es que la política argentina de no involucrar al FMI en la negociación fue coincidente con la nueva actitud asumida por los republicanos en el gobierno de EEUU, que modificaron la forma de intervención del organismo ante las crisis financieras, retirando los apoyos que se sostuvieron en la gestión anterior. De hecho, más allá de las voluntades coincidentes, si las hubo, EEUU avaló la política de negociación encarada por la Argentina y que no afectaba principalmente a acreedores de ese país de origen.

El año de la asunción de Kirchner había sido previsto para realizar en Argentina la IV^o Cumbre de Presidentes de las Américas¹⁸ y continuar con el cronograma hacia el establecimiento del ALCA en el 2005. El discurso presidencial privilegió desde el primer momento las relaciones con los vecinos y especialmente con el MERCOSUR y su socio mayor: Brasil. El dato interesante era la convergencia de dos nuevos presidentes en el gobierno de Brasil y Argentina para ese año, desde enero Lula y desde mayo Kirchner. La cotización en dólares de las respectivas monedas era convergente y se presagiaba por los discursos de ambos la potencialidad de profundizar la integración regional. Es un tema que se fue diluyendo con el transcurrir del tiempo, con Brasil más proclive a sustentar las recomendaciones del FMI en materia cambiaria y con Argentina más orientada a sostener un tipo de cambio elevado para privilegiar el crecimiento de la producción local. El comercio bilateral se deterioró, profundizando la dependencia argentina de las importaciones de bienes de capital originados en Brasil. Si bien Argentina diversificó sus relaciones comerciales en el período, se destaca la pérdida relativa de las relaciones con los países limítrofes.

Producto de la crisis en la Argentina, la reunión de Presidentes americanos que estaba prevista realizarse en el 2003, se terminó realizando en noviembre del 2005 en la ciudad de Mar del Plata. Allí también funcionó una Cumbre de los Pueblos organizada por la campaña continental de lucha contra el ALCA. En la reunión de los Presidentes el ALCA no figuraba en la agenda de discusión, y la insistencia de la diplomacia de EEUU y algunos de sus aliados por incorporar el tema motivó una votación dividida donde el MERCOSUR y Venezuela expresaron la posición contraria por avanzar en el tema ALCA sin antes discutir la baja de subsidios agrícolas en tratamiento en la OMC. Quince días después en Hong Kong, Brasil y Argentina flexibilizaron la posición para facilitar un acuerdo y documento final en el cónclave de la OMC.

La política exterior de la Argentina en materia económica ha tenido varias aristas, que pueden sintetizarse en el mejoramiento de las relaciones con las grandes potencias, especialmente luego del canje de títulos de la deuda pública en default. Las relaciones con EEUU fueron de empatía y coincidencia con relación al tratamiento de la deuda y especialmente en la disputa discursiva con el FMI. Con Europa fueron creciendo aunque con conflictos con las empresas privatizadas de servicios públicos, las que interpusieron demandas contra el gobierno argentino ante el CIADI por 16.000 millones de dólares, de los cuales ya existe sentencia por unos 400 millones de dólares que la Argentina está recusando, aunque comprometiéndose al pago si el segundo fallo fuera coincidente con el primero. El motivo de las demandas era el cambio de las reglas de juego, pues

¹⁸ La primera fue en Miami, EEUU en 1994, la segunda en Santiago de Chile en 1998, la tercera en Québec, Canadá en 2001.

la devaluación modificaba once años de convertibilidad donde la facturación en pesos favorecía una transferencia de utilidades al exterior en divisas equivalentes (un dólar igual a un peso), que bajo las nuevas condiciones esa facturación debía triplicarse en pesos para mantener el mismo nivel de rentabilidad en divisas. De un comienzo conflictivo, especialmente en las entrevistas del presidente Kirchner con esos empresarios en España y Francia específicamente, se pasó a una relación más aceiteada producto de la mejora en la rentabilidad, en algunos casos sostenidas con subsidios oficiales para demorar incrementos de tarifas. Pese a las mejoras, las demandas en muchos casos siguen en pie.

Resulta más complejo analizar las relaciones en la región, especialmente con Brasil y el Uruguay. Con este último se llegó a instalar una demanda en los tribunales de La Haya, con resultados negativos para la Argentina. El tema del conflicto se deriva de inversiones de dos plantas productoras de pasta de papel en la costa compartida del Río Uruguay. Con Brasil los conflictos remiten a cuotas de comercio y en rigor, a políticas macroeconómicas no convergentes, diluyendo la potencialidad de proyectos comunes de desarrollo y asociación virtuosa para una estrategia compartida. La novedad vino más allá del MERCOSUR, y se debe al ingreso de Venezuela. Las relaciones entre Buenos Aires y Caracas se potenciaron especialmente en temas económicos. Venezuela es actualmente el prestamista internacional que tiene la Argentina, más allá de los organismos internacionales, con compras de títulos en los últimos dos años por 2.800 millones de dólares y se encara una licitación de títulos (Bono del Sur) en el mundo a suscribir por Venezuela y con destino a la Argentina, por la mejor tasa que obtiene un país avalado con crecientes ingresos derivados del aumento del precio del petróleo. Ese Bono del Sur puede ser el inicio de una renovada expectativa por un Banco del Sur y otros mecanismos de relanzamiento de la integración regional, fortalecido con la reciente incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. Este acercamiento al gobierno de Chávez ha sido fuertemente criticado por Roberto Lavagna¹⁹ (luego de su salida del ministerio) y diversas expresiones de las clases dominantes, al tiempo que constituye parte inescindible del actual momento de la economía en Argentina, tanto por sus necesidades financieras como energéticas.

Este privilegio a las relaciones con el mercado mundial, tanto por el “arreglo” de la deuda en cesación de pagos, como por los vínculos comerciales y la política de seducción de inversiones se explica por el peso dominante de las Corporaciones Transnacionales (CTN) en la Argentina, las que potenciaron su papel de dominación en la estructura económica en la década del 90'. Para el año 2000²⁰, sobre las 500 más grandes empresas en la Argentina, 258 (51,6%) eran extranjeras y 56 (11,2%) asociaciones entre empresas de capital local y externo, totalizando el 62,8% bajo el dominio del capital foráneo. Ese conjunto participa del 79,5% de la producción total de esas 500 empresas y del 94,2% de las utilidades. Son el 98,1% de la producción en Minas y canteras, el 83,6% de la industria manufacturera, el 81,9% de electricidad, gas y agua, el 92% de comunicaciones y el 57,4% del resto de las actividades que actúan en la construcción, comercio y transporte. En un breve racconto histórico de ese proceso y de la disputa entre CTN de EEUU y Europa, puede sintetizarse que al comienzo de las privatizaciones en la década del 90' los capitales europeos aventajaban a los de EEUU en la apropiación y concesiones de empresas y negocios del Estado argentino. Desde 1993 con la privatización de YPF, hecha a medida por Cavallo y Menem, los capitales originarios de los Estados Unidos acapararon el 47% de los desembolsos, seguido en segundo término por España y Chile con el 11% cada uno, más 8% de Italia, Francia y Gran Bretaña respectivamente. EEUU 47% contra un 35% de la suma de esos países de Europa. Para 1999 la proporción había variado: 33% para empresas originarias de EEUU, 17% de España, 15% de Chile, Francia con 10% e Italia con 10%. Esos países europeos suman 37% contra el 33% de EEUU. Ese mismo año, Repsol compra YPF y adquiere las acciones remanentes en manos del Estado. La situación quedó así a comienzos del 2000: 42% en manos del capital externo proveniente de España, 26% de EEUU, 10% de Chile, 7% de Francia y 6% de Italia; con lo que Europa más que duplicaba a EEUU en la batalla por las privatizaciones que

¹⁹ Diario Clarín del 6/05/06.

²⁰ María Agustina Briner y Martín Schorr. Principales características e impactos de la “extranjerización” reciente de la economía argentina. Un análisis del desempeño de las grandes empresas transnacionales durante la década de los noventa. Revista Realidad Económica, n° 189 del 1 de julio al 15 de agosto de 2002. Buenos Aires, Argentina

había ganado Europa.²¹ La CEPAL²², informa que entre 1992 y el 2000, la Inversión Extranjera Directa de la Unión Europea alcanzaba al 59,9%, contra el 25,3% de EEUU. No hay duda entonces, sobre la ventaja en los años 90 de los capitales europeos sobre los estadounidenses en la apropiación de medios de producción para la disputa del plusvalor generado en la Argentina. El default decretado en la crisis de fines del 2001 afectó entre los inversores externos, principalmente a europeos y japoneses. La “normalización” capitalista organizada por Duhalde primero y luego por Kirchner, incluyó recomponer relaciones con el capitalismo desarrollado y especialmente con EEUU. La administración Bush favoreció la política de “arreglo” de la deuda pública, aún con las diatribas discursivas contra el FMI. Con la normalización de un “capitalismo serio” se busca atraer inversores, los que se buscaron en Mayo pasado en Viena (Cumbre Europa y América Latina) y en Septiembre en EEUU, convalidando un tipo de inserción de la economía local en el sistema mundial, profundizando el papel de las inversiones externas y la dependencia económica y política.

Sobre expectativas y realidades

La principal crítica que se hace al gobierno desde la izquierda y buena parte del movimiento popular, tal como ya manifestamos y con la buena pluma de Atilio Borón, es sobre la distancia que existe entre el discurso y la práctica en materia de política económica. Dureza discursiva con el FMI pero riguroso y puntual pago de las acreencias con dicho y otros organismos internacionales por 25.000 millones de dólares, reclamados para otros destinos. Crítica gubernamental a los principales operadores económicos, caso de las empresas de servicios públicos privatizados y restablecimiento del ciclo de negocios y rentabilidad de los mismos. Crecimiento de la economía y mantenimiento de elevados niveles de desigualdad²³. Crecimiento económico y subsistencia de elevados niveles de indigencia, pobreza y desempleo, precariedad laboral e informalidad. La principal demanda es por la distribución del ingreso y la riqueza, como punto de partida para la discusión de otro proyecto de país, con otras relaciones sociales para la producción y distribución de bienes y servicios.

La dinámica social en Argentina reconoce un ciclo de ascenso de las luchas, especialmente entre 1997 y 2002. Son fechas coincidentes con la recesión entre 1998 y 2002. La crisis del tequila había elevado el desempleo al máximo de 18,4% en mayo de 1995 y si bien hubo tendencias declinantes posteriores, en mayo de 2002 ascendía a 21,5%. La reivindicación central de las luchas de ese periodo fue por el empleo y el ingreso de una población que denunciaba al 57% por debajo de la línea de la pobreza en 2002. Las luchas por el empleo abrieron camino a la emergencia del movimiento piquetero, constituido por trabajadores desempleados y que poblaron la resistencia de este periodo. El reclamo de los desocupados confluía con la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, creada en la década del 90' como alternativa a la Central tradicional, la CGT, y con pretensión de agrupar a todos los trabajadores con independencia de su carácter activo o pasivo, formal o informal, regularizados o no. La CTA lideraba un agrupamiento social más allá de los trabajadores, articulando con productores y empresarios, pequeños y medianos del campo y la ciudad en la demanda “Por ningún hogar pobre en la Argentina” y que consiguieran más de tres millones de adhesiones en una consulta popular organizada dos días antes del estallido de diciembre del 2001.

Son consideraciones necesarias porque la demanda del movimiento popular estaba concentrada en empleo e ingreso. Es a partir de esas demandas que cada sector social articulaba sus propias reivindicaciones. En ese marco es que se generaron expectativas ante los primeros movimientos del gobierno de Kirchner. Hemos hablado ya de la debilidad de origen del gobierno y de la poca información sobre qué política llevaría adelante, apenas satisfecha con lo que sugería la continuidad del ministro de economía. En materia de satisfacer la demanda de ingreso, el gobierno

²¹ Julio C. Gambina y Daniel Campione. “Los años de Menem”. Cirugía mayor. Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2003.

²² La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2001. Tomado del sitio en Internet de la CEPAL.

²³ El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica para el segundo trimestre del 2006, que el 10% de mayor ingreso recibe 31 veces más que el 10% de menor percepción. Si bien es un dato que se viene reduciendo desde la crisis del 2001, mantiene la relación existente previa a la recesión de 1998. Pero también, un signo de la desigualdad lo ofrece el Banco Central de la República Argentina, BCRA, al indicar que el 5% de las empresas concentran el 91% de los créditos otorgados en el sistema financiero local.

venía de otorgar el Plan Jefes y Jefas de Hogar, un subsidio de \$150 a 1.700.000 beneficiarios, que aún se mantiene pese al deterioro de la capacidad de compra derivado de la inflación de precios minoristas del orden de 82% desde el momento de la devaluación en enero de 2002 hasta septiembre del 2006, momento de escritura de este texto. El discurso inaugural de Kirchner apuntaba que los problemas sociales se resolvían con política económica y eso generó expectativas que hasta ahora no se confirman.

Una de las primeras medidas asumidas por el gobierno y vinculada a las expectativas en materia económica fue la convocatoria al “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil” que elevó el salario mínimo a \$450 desde el 1/9/04. En la práctica y analizando ahora ese Consejo, sólo se ocupó de la fijación del salario mínimo que ascendió a \$510 desde mayo/05 y a Julio/06 llegó a \$630, proyectándose una suba hasta \$800 para diciembre del 2006. Las expectativas estaban centradas en la amplitud de la convocatoria. Uno de los problemas de gobierno era su debilidad y la escasa sustentación social, con lo cuál la convocatoria amplia satisfacía a diversos sectores, especialmente a los nuevos actores que habían emergido en los últimos años, especialmente los trabajadores de la CTA, los desocupados articulados como piqueteros, sectores de la pequeña y mediana empresa y cooperativistas que no habían sido convocados por gobiernos anteriores. También fueron parte de la convocatoria los clásicos representantes de empresarios y trabajadores, entre otros la Unión Industrial Argentina, UIA y la Confederación General del Trabajo, CGT. Las expectativas se asociaban a la posibilidad de constituir un bloque social para sustentar una política alternativa.

Lo que sorprendía era la incorporación de nuevos actores sociales, habilitando así el crecimiento de las expectativas y más aún, el acercamiento de algunas organizaciones populares y dirigentes sociales al gobierno, llegando posteriormente a ocupar cargos gubernamentales y en algunos casos, subordinar sus estructuras y organizaciones a la política oficial. Se pasó desde las expectativas a la cooptación de dirigentes y organizaciones. Esas expectativas se fueron diluyendo y se puede constatar en una durísima declaración suscripta el 27/4/06 por la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Federación Agraria Argentina (FAA), organizaciones que actúan dentro del Consejo y que pretenden la articulación de un bloque social y político para otro país posible, señalando que habían saludado “positivamente la puesta en marcha de esta Institución ya que entendíamos implicaba la posibilidad de gestar un espacio concreto de participación de los diversos sectores del quehacer productivo, promoviendo una experiencia de concertación a favor de un proceso de redistribución justa de los ingresos y de reindustrialización del país.” “Que a casi 20 meses de su convocatoria, el Consejo del Salario sólo se ha reunido en dos oportunidades (2 de septiembre del 2004 y 1 de julio del 2005) al tiempo que se ha desactivado el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo que lo constituían.” “Que el “no funcionamiento del Consejo” ha sido reemplazado en la práctica por una estrategia gubernamental que se articula casi exclusivamente con una parte de la representación de los trabajadores (la CGT) y una parte de la representación empresarial (la UIA).” Las expectativas de constituir un nuevo sujeto que con participación popular aliente un bloque social y político para un nuevo tiempo histórico eran frustradas.

La realidad es que en la etapa actual de la política económica, donde el eje pasa por el combate a la inflación, el gobierno ha privilegiado el acuerdo político con los clásicos representantes del empresariado (cámaras empresarias) y de los trabajadores (CGT). El tema central es el acuerdo de precios y salarios para contener el alza de los precios. Con una expectativa de inflación del 15% para todo el año 2006, el gobierno inició una agresiva campaña de acuerdos para la contención e incluso disminución de los precios, que para el primer semestre del año 2006 redujeron el índice de precios minoristas a 4,9% y el de precios mayoristas al 5%, con una proyección para todo el año de un índice inflacionario de un dígito. Anualizada la evolución del primer semestre se aleja bastante del pronóstico agorero de comienzo del año 2006. Como hemos sostenido, la motivación de las autoridades económicas para este periodo pasa por la evolución del índice de precios. El objetivo señalado es el control de la inflación, y por eso genera satisfacción la tendencia decreciente de los indicadores de precios, sin considerar que se está contribuyendo a distorsionar el sistema de precios relativos con un impacto regresivo sobre el ingreso de los trabajadores y todos aquellos que vinculan sus ingresos a la capacidad de compra de los salarios. Entre las medidas adoptadas se destaca el “acuerdo de precios” sobre un conjunto de productos asociados al consumo popular y sobre el salario de los trabajadores regularizados,

que apenas son el 21% de la fuerza de trabajo, pero marcan tendencia limitante en el conjunto de los trabajadores. Ese “acuerdo” es el armado de un bloque social para sostener la política de gobierno de control sobre algunas variables del sistema de precios, con algunos productos y salarios. La política de acuerdos se completa con subsidios estatales a empresas que tienen congelados sus precios, tal como ocurre con las tarifas en el caso de empresas privatizadas de servicios públicos. De este modo queda una franja de precios para bienes y servicios que se encuentra sin regulación y a la que solo tienen acceso sectores de altos ingresos. Se contribuye así a la generación de una discriminación por desigualdad creciente en el consumo por la apropiación diferenciada del ingreso nacional. El resultado es una población dividida en tres tercios, donde el tercio de más altos ingresos no tiene restricciones en su capacidad de gasto; un tercio de medianos ingresos con algunas restricciones para el consumo suntuario y un tercio de bajos ingresos que limita su gasto en las necesidades básicas. Deba recordarse que el 31,4% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza.

La inflación es un mecanismo de distribución de la riqueza y del ingreso para favorecer la concentración. El combate a la inflación es imprescindible, pero debe abordar en forma conjunta al sistema de precios, induciendo una redistribución progresiva del ingreso y la riqueza. Por eso sostenemos que es el monopolio en la producción y en la distribución el principal responsable de la inflación, ya que tiene capacidad para definir la asignación de renta en beneficio propio. Uno de los temas centrales de ese poder de monopolio pasa por la contención de la demanda de mejora de los ingresos de los trabajadores y sus condiciones laborales; al mismo tiempo que presiona sobre el Estado para obtener beneficios fiscales como forma de apropiación de la renta pública. Las empresas monopólicas, principalmente externas, existen en todos los sectores de la economía nacional y tienen suficiente poder para disputar la apropiación de la renta fiscal y nacional para mejorar su rentabilidad. Actuar sobre el poder económico y redistribuir ingresos y riquezas es una forma de reestructurar el sistema de precios, combatir la inflación y reorientar el rumbo de la economía modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados económicos de la sociedad argentina. No es por cierto la política económica impulsada.

En el debate por estos acuerdos se construye una base de sustentación para el proyecto político de gobierno que excluyó al conjunto social y plural aludido anteriormente. Entre los excluidos de la discusión existe la conclusión de una opción gubernamental por cerrar filas, especialmente con la UIA y la CGT, dos agrupamientos gremiales reanimados con las nuevas condiciones de funcionamiento económico y político en la Argentina. Son actores clásicos a la hora de constituir bloques sociales para el acuerdo de un proyecto como el que nuevamente intenta el peronismo en el gobierno de la Argentina.

Los sujetos del modelo y la alternativa

Hemos aludido al objetivo de “reconstruir el capitalismo nacional”. Puede objetarse ese propósito desde la ausencia de un sujeto burgués nacional, o de una alianza social con hegemonía burguesa local para encarar el programa. Pero no debe subestimarse la misión gubernamental para otorgar función al capitalismo realmente existente en el país, es decir, aquel que determina la dominación desde un bloque de clases que agrupa al poder económico. Aludimos en primer lugar a los acreedores externos y sus vinculaciones con los organismos financieros internacionales y el G7, grupo de los países capitalistas desarrollados que pretenden ordenar el sistema mundial en acuerdo con los intereses de los capitales más concentrados y las potencias imperialistas. En segundo lugar mencionamos a los principales beneficiarios de la devaluación, el sector productor y exportador de bienes, petróleo y soja, entre otros, los que concentran lo principal del crecimiento experimentado desde el 2003. En tercer lugar aquel que constituían el núcleo beneficiario de la convertibilidad por once años: las privatizadas de servicios públicos, y la banca transnacional y los negocios financieros a ellos vinculados. Estos dos últimos sectores han recompuesto su rentabilidad y con matices alientan un nuevo ciclo de negocios para la valorización creciente de sus inversiones.

Todos estos sectores han ido mejorando su situación relativa respecto de la crisis de fines del 2001. Si bien subsiste la contradicción entre aquellos que bregaban por la dolarización (acreedores de la deuda pública; empresas privatizadas y bancos transnacionales) y aquellos que

demandaban la devaluación (industriales y exportadores)²⁴, unos y otros pujan por reacomodarse en el nuevo marco de funcionamiento del capitalismo local. Cada uno reivindica ventajas competitivas para la mejora de la rentabilidad. Pretendiendo más cobros los acreedores (los holdout, p.e.); menos retenciones los exportadores y si es posible la eliminación de las mismas; mayores compensaciones los bancos; y ajustes de tarifas las privatizadas. Cada quién, parcial y progresivamente va obteniendo acuerdos o promesas de los administradores del Estado en el sentido de sus demandas. Señala Lozano en el citado artículo “Para expresarlo de manera muy concreta: la lógica económica que se asienta luego de la devaluación es la de un régimen donde se obtiene el mismo nivel de riqueza, sobre la base de un mayor nivel de explotación de la fuerza de trabajo y una mayor pauperización de la sociedad”.

La satisfacción de las demandas del poder se manifiesta como su contrario en el seno de las clases subordinadas. Aunque bajó el desempleo y la población bajo la línea de la pobreza, existe consenso en la gravedad que asume la desigualdad, indicador de continuidad de un patrón de distribución regresiva del ingreso. El aumento del empleo se asocia a la precariedad y la informalidad, donde se destaca un nuevo piso para el fenómeno de la desocupación y la pobreza. Si en octubre de 2001, según datos del INDEC, el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza se ubicaba en el 38,3%, cinco años después el guarismo baja al 31,4%, con lo cual, las motivaciones de la revuelta popular se mantienen casi intactas, pero sin la movilización popular que demande su resolución. Así, lejos de cambiar los beneficiarios de la política económica del gobierno, hasta el momento, la orientación principal de ella ha restablecido las condiciones de los negocios del bloque de clases dominantes, y ha profundizado las tendencias de explotación y pauperización, claro que acompañadas de un discurso que proclama la distribución del ingreso. Es cierto que la recuperación ha puesto en funcionamiento la capacidad ociosa de la industria y que se han generado puestos de trabajo e ingresos, claro que todos admiten que gran parte de ellos son en condiciones precarias y por debajo de la línea de pobreza. Si se mira el tema desde los perjudicados se puede constatar una mejoría en términos absolutos de disminución de la pobreza y el desempleo, pero que en términos relativos mantiene las tendencias a la desigualdad, con el adicional que supone la instalación de un consenso social que evalúa a la situación económica en los marcos de la superación de la crisis.

El escaso consenso electoral inicial del actual gobierno motivó un conjunto de iniciativas políticas del poder ejecutivo que partían de la nueva situación de la lucha de clases en la Argentina. Eso nos hace pensar en que lo nuevo fue la emergencia del movimiento popular para condicionar una forma de restablecimiento de un capitalismo “normal” o “serio”. Convengamos, que un capitalismo serio o normal es aquel que asegura la reproducción ampliada del capital con consenso de la mayoría de la sociedad y la capacidad de disciplinar a la minoría insatisfecha o resistente. Fue la resistencia acumulada y la pueblada la que puso límites al discurso hegemónico de los últimos años. Esa es la razón esencial para diferenciar la administración Kirchner con las inmediatas anteriores. Lo distinto está más en las condiciones que supo imponer el movimiento popular, que en el programa político oficial. Claro que una incógnita, a partir de la recuperación de poder en el gobierno y la continuidad de variables macroeconómicas favorables remite a la consolidación, o no, de un paradigma de acumulación de capitales asentado en las reformas estructurales de los 90’, mediante una brutal transferencia de ingresos generadas con la convertibilidad primero (1991-2002) y con la devaluación después (2002-2006).

A pocos años de la pueblada, la iniciativa política es un camino de ida y de vuelta. Es cierto que el poder popular confronta con las clases dominantes y sus redes de poder cultural, económico, político y social; pero también lo hace con la propia fragmentación y desarticulación de un espacio que sigue buscando formas de expresar la nueva emergencia política de los trabajadores y otros sectores populares afectados por la forma de funcionamiento del capitalismo en la Argentina. La perspectiva de “reconstruir el capitalismo nacional” es ajena a quiénes sostenemos una estrategia de solución de las necesidades socio económicas más extendidas y que no pueden resolverse desde la lógica de explotación capitalista, aún de carácter nacional, máxime en tiempos de globalización capitalista y crudamente expresada en la dependencia del capitalismo local a las

²⁴ Claudio Lozano, en Los gobiernos progresistas en debate. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. Compilador Antonio Elías. Clacso e Instituto Cuesta Duarte/PIT CNT, Buenos Aires, 2006.

demandas de los acreedores externos y las transnacionales hegemónicas en la producción, el sistema financiero, el comercio exterior y la prestación de los servicios públicos.

No obstante haberse producido modificaciones importantes en la política de gobierno, existen una serie de cuestiones, de gran importancia, sobre las que no se han producido cambios de fondo y que marca ciertamente el carácter del nuevo gobierno hasta el momento. Es necesario profundizar al respecto, ya que el primer desafío es la crítica del capitalismo realmente existente, que es una relación social de explotación y por ello hace falta considerar dialécticamente las partes que lo configuran, sus beneficiarios y perjudicados, sus intereses y motivaciones, tanto como sus contradicciones y luchas. Entre los aspectos salientes para identificar el rumbo del capitalismo en la Argentina se puede acudir a aquellos aspectos esenciales para el núcleo central de las clases dominantes en el capitalismo en la Argentina, tal como la demanda de cobro de los acreedores de la deuda pública; el incremento de las tarifas de servicios públicos reclamadas por las privatizadas y que por ahora se resuelven parcialmente con subsidios, perdón de multas y ampliaciones de espacios de negocios cuando es posible, e incluso re-estatizaciones en los casos inevitables, tal como el correo, el espacio radioeléctrico, la empresa de aguas y alguna línea de ferrocarril. El tema incluye la creación de la petrolera Enarsa con posibilidad de incluir en su seno al capital privado, al tiempo que desarrolla negocios con otras petroleras y empresas vinculadas al rubro de la exploración y explotación petrolera. La función del Estado se mantiene en el sostenimiento de un modelo de acumulación para favorecer la iniciativa privada y el mercado.

Lo comentado en materia de deuda, tarifas, demandas de los bancos e inserción subordinada en el mercado global, en tanto asuntos esenciales de la estrategia de las clases dominantes que actúan en la Argentina, motivan consignas y movimientos de rechazo en el movimiento popular. El no a las demandas de la dominación constituyen la base de constitución de sujetos necesarios para el aliento de políticas alternativas. Es un fenómeno que viene experimentando un proceso de organización y construcción de subjetividad que aún no ha podido expresarse como alternativa política integral. Por eso, es importante analizar que la crisis política en nuestro país no es exclusiva del bloque dominante y su sistema de gobierno y representación, sino que al existir un cambio histórico cualitativo con el protagonismo popular expresado en las jornadas de diciembre del 2001, también están en crisis los propios actores protagonistas de las múltiples resistencias que desembocaron en la pueblada y el proceso posterior.

Este hecho que suena paradójico, ya que podría entenderse que los que fueron las expresiones más importantes de la resistencia no debieran estar en cuestión, no se entiende sin entrar a evaluar las propias prácticas políticas, donde junto a lo nuevo, también se expresan visiones sectarias, hegemónicas, que contrapesan los objetivos de superación de la realidad fragmentada del movimiento popular. Superar esa fragmentación es el desafío para poder constituir en un proceso dado, un verdadero bloque popular que dispute la construcción de otro país posible, en el marco de la lucha por otro mundo posible que hoy se sostiene en el Foro Social Mundial y en otros ámbitos.

Argentina sigue generando expectativas por su potencialidad en la perspectiva de objetar el sentido común que instaló la corriente principal de pensamiento en los últimos años en escala global. Sin embargo, ello no termina de materializarse, pues para ese fin se requiere resolver una asignatura pendiente en la construcción de una alternativa política, social y cultural que defina socialista. Al objetivo de reconstrucción capitalista hoy explicitado por el gobierno le falta su contrario, que sea sostenido por un movimiento de sujetos concientes y que hoy continúa la búsqueda en un marco de fragmentación. El proyecto del gobierno es débil en expresar el bloque social y político que lo sustenta. Las clases dominantes presionan para apropiarse del planteo sustantivo por recrear el capitalismo. Las clases explotadas y subordinadas no terminan de formular su proyecto, que no puede pasar por reconstruir una sociedad de explotación. Es un objetivo a definir en la práctica cotidiana y junto a otros pueblos.